



ACUERDO DE UNIÓN CIVIL: REGULACIÓN Y PROBLEMAS PRÁCTICOS

Prof. Fabiola Lathrop

I. Introducción

La Ley N°20.830, de 21 de abril de 2015, que crea el Acuerdo de Unión Civil (en adelante, la Ley), busca proteger jurídicamente las relaciones afectivas estables entre parejas del mismo o distinto sexo. Esta Ley constituye un decisivo avance para la consecución de un Derecho de Familia ajustado a las necesidades de la sociedad chilena. Como se ha señalado, el AUC es un acto de familia que “se instala en la línea de protección a los principios y valores rectores del Estado Democrático de Derecho, es decir, de los derechos humanos, como los de respeto de la diversidad de formas de vida, igualdad y no discriminación, intimidad y libre desarrollo de la personalidad y a formar una familia”.¹

El material explicativo y el video fueron preparados por la Abogada de la Universidad de Chile, Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca; Profesora Asociada de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Ha publicado en materia de matrimonio, divorcio, ancianidad, filiación, responsabilidad parental, y derechos del niño. Ha participado como consultora externa de UNICEF-Chile; y como académica especialista en diversos programas de postgrado, conferencias tanto en Chile como en el extranjero, y discusiones parlamentarias en materia de familia e infancia. Actualmente es asesora del Ministerio de Desarrollo Social para la discusión parlamentaria de la ley de garantías de los derechos de la niñez.

Esta Ley regula, entre otros aspectos, los requisitos para la celebración, prohibiciones, efectos personales y patrimoniales, y formas de disolución del Acuerdo de Unión Civil (en adelante, AUC), a los que nos referiremos a continuación de manera

¹ Hernández Paulsen, Gabriel, “Valoración, aspectos destacados y crítica de la Ley que crea el Acuerdo de Unión Civil”, en Tapia Rodríguez Mauricio y Hernández Paulsen, Gabriel (coordinadores), *Estudios sobre la nueva Ley de Acuerdo de Unión Civil*, Thomson Reuters/La Ley, Santiago de Chile, 2016, p.2.



breve y descriptiva. Asimismo, a poco andar de su vigencia, ha generado algunos problemas prácticos, a los que dedicaremos nuestra atención.²

II. Descripción de la Ley

1. Concepto y alcance

El AUC es definido en el Título I artículo 1° inciso primero de la Ley 20.830 como “un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente”. Por su parte, el inciso segundo señala que su celebración conferirá el estado civil de “conviviente civil”.

De esta definición se desprenden una serie de elementos.

En primer lugar, el AUC es entendido como un contrato que tiene como finalidad regular los efectos de la vida afectiva en común de dos personas, confiriéndoles un nuevo estado civil, siendo éste uno de sus principales efectos. Al igual que el matrimonio, el AUC es definido como un contrato; más propiamente, es un acto jurídico de familia que genera efectos patrimoniales y extrapatrimoniales.

En segundo término, si bien la Ley no hace referencia expresa al hecho de que individuos del mismo sexo puedan celebrar este acuerdo, esto se desprende implícitamente del término neutro “persona” que emplea.

En cuanto a la necesidad de que los contrayentes compartan un hogar, es interesante señalar que la Ley no regula el deber de cohabitación dentro los deberes de los convivientes civiles.

Por último, el AUC tiene como finalidad regular los efectos jurídicos de la vida afectiva de forma estable y permanente entre los convivientes, buscando otorgar

² Algunas de estas deficiencias son enunciadas en los capítulos de la obra: Tapia Rodríguez Mauricio y Hernández Paulsen, Gabriel (coordinadores), *Estudios sobre la nueva Ley de Acuerdo de Unión Civil*, Thomson Reuters/La Ley, Santiago de Chile, 2016.



estabilidad y certeza jurídica a las parejas conformadas por personas de igual o distinto sexo que opten por esta institución.

2. Requisitos de forma, de validez y prohibiciones

Dentro de los requisitos de forma del AUC se encuentra el que pueda celebrarse personalmente o a través de un mandatario, en el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante cualquier oficial, en su oficina o en el lugar que señalen los contrayentes dentro de su territorio jurisdiccional.

En este acto, los contrayentes deberán declarar, bajo juramento o promesa, no encontrarse ligados por vínculo matrimonial no disuelto o un AUC vigente. A continuación, el Oficial deberá levantar un acta de todo lo obrado, firmada por él y por ambos contrayentes, la cual deberá ser inscrita en un registro especial llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, indicando nombre completo y sexo de los contrayentes, fecha, hora, lugar y comuna en que se celebró este contrato, además de la certificación del oficial del cumplimiento de los requisitos establecidos para su celebración.

Cabe señalar que la ley dispone expresamente que el AUC no podrá sujetarse a plazo, condición, modo ni gravamen alguno; tampoco podrá prometerse su celebración. Se sigue así la regla general clásica de que los actos de familia, en su mayoría, no están sujetos a modalidades.

En cuanto a los requisitos de validez de este acto, es menester que los contrayentes sean mayores de edad y que tengan la libre administración de sus bienes (sin perjuicio de que el disipador interdicto puede celebrarlo por sí mismo). Además, será necesario que los contrayentes manifiesten su consentimiento libre y espontáneo, entendiéndose por tal aquel en que no medie el error en la persona del contratante o fuerza.



En materia de prohibiciones, no podrán celebrar este contrato los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado, como tampoco las personas ligadas por vínculo matrimonial no disuelto o un AUC vigente.

Finalmente, en lo relativo a los acuerdos o contratos equivalentes celebrados en el extranjero, la Ley dispone que serán reconocidos en Chile, sujetándose a los requisitos de forma y fondo del país en que haya sido celebrado. Este pacto podrá declararse nulo de conformidad a la ley chilena en caso de contravención a los requisitos de validez y prohibiciones establecidos en la misma. Estos convivientes civiles se considerarán separados de bienes, salvo que al momento de inscribir el acuerdo en Chile pacten someterse al régimen de comunidad. Para que dichos acuerdos produzcan efecto en Chile, deberán inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil. Respecto a la terminación de estos acuerdos y los efectos que ella produce, se someterán a la ley extranjera. Se reconocerán en Chile las sentencias extranjeras que declaren la nulidad o terminación de estos acuerdos conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil. Por último, los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile como AUC.

3. Efectos

3.1. Deberes de los convivientes

En cuanto a los deberes de los convivientes, la Ley solo menciona -sin mayor abundamiento- dos obligaciones: ayuda mutua y la obligación de solventar los gastos generados por su vida en común, en atención a sus facultades económicas y al régimen patrimonial pactado. Resulta interesante observar el contraste que se produce en esta materia entre el AUC y la institución del matrimonio, dado que esta última contiene una regulación más exhaustiva al respecto.

3.2. Régimen de bienes

El AUC establece como régimen patrimonial supletorio entre los convivientes civiles el de separación de bienes, sin perjuicio de que en su reemplazo puedan pactar el



régimen de comunidad. Este último se rige por las normas de comunidad del Código Civil, y comprende los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo, dejando a salvo los bienes muebles de uso personal necesario del conviviente que los ha adquirido. A su vez, en caso de haber pactado comunidad, se otorga a los convivientes la posibilidad de sustituirlo por el de separación total de bienes mediante escritura pública.

3.3. Derechos hereditarios

Una importante innovación en materia sucesoria es que los convivientes civiles pasan a ser herederos intestados o legitimarios entre sí, y asignatarios de la cuarta de mejoras. Asimismo, se reconoce la posibilidad de desheredamiento por cualquiera de las tres primeras causas del artículo 1208 del Código Civil. Por último, se le concede al conviviente sobreviviente los derechos de adjudicación preferente del inmueble y de uso o habitación consagrados en la regla 10° del artículo 1337 del citado cuerpo legal.

3.4. Filiación

A diferencia de la Ley de Matrimonio Civil, el AUC es bastante deficitario en esta materia, al establecer sólo dos normas al respecto. La primera de ellas, consagrada en el artículo 21 de la Ley, establece una presunción de paternidad en caso de convivientes civiles de distinto sexo. La segunda, establecida en el artículo 45, modifica expresamente el artículo 226 del Código Civil,³ otorgando derechos al conviviente civil en materia de cuidado personal del hijo de su pareja, aunque sólo en los casos de inhabilidad física o moral de ambos padres.

³ La norma queda modificada de la siguiente manera: “Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2.

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes, al cónyuge o al conviviente civil del padre o madre, según corresponda”.



3.5. Parentesco

El artículo 4° de la Ley establece que mientras dure la unión, existirá parentesco por afinidad entre los consanguíneos de uno de los convivientes civiles y el otro.

3.6. Ilícitos

Se reconoce legitimación activa al conviviente civil para reclamar la indemnización de perjuicios derivada de un hecho ilícito de un tercero, en caso de fallecimiento de su pareja o cuando ésta se encuentre imposibilitada para ejercer por sí mismo las acciones pertinentes.

3.7. Materia procesal

Se le otorga competencia al juez de familia para los asuntos que se promuevan entre los convivientes civiles, o al juez partidario en caso de liquidación de los bienes comunes.

3.8. Materia legal y reglamentaria

Se establece que todas las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e incluso alusiones que hagan las leyes y reglamentos respecto de los cónyuges o convivientes, se harán extensivas a los convivientes civiles. Por lo demás, se establecen diversas modificaciones legales en materia sanitaria, previsional, laboral, entre otras, con el objeto de igualar al conviviente civil respecto del cónyuge.

3.9. Terminación

En cuanto a los efectos una vez terminado el AUC, la Ley contempla el derecho a compensación económica al conviviente civil que no pudo desarrollar una actividad remunerada o la ejerció en menor medida de lo que podía y quería, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común.



4. Término

La Ley establece que el AUC podrá terminar por muerte natural de uno de los convivientes civiles, por muerte presunta, por comprobación judicial de muerte, por matrimonio entre los convivientes, por mutuo acuerdo o por voluntad unilateral de alguno de ellos, y por declaración judicial de nulidad del acuerdo. El término del AUC pondrá fin a todas las obligaciones y derechos que deriven de este contrato y retrotraerá a los contrayentes a su estado civil anterior.

La terminación por mutuo acuerdo y por voluntad unilateral obedecen a formas de disolución voluntarias del AUC que no requieren expresión de causa. Para llevar a cabo el término del AUC por estos medios, la Ley requiere que se deje constancia en escritura pública o acta otorgada ante el Oficial del Registro Civil y que estas se subinscriban al margen de la inscripción del AUC señalada en el artículo 6° de la Ley, siendo esta inscripción el presupuesto para que el término sea oponible a terceros.

Adicionalmente, en el caso de la terminación por voluntad unilateral, deberá notificarse al otro conviviente civil mediante gestión voluntaria ante el Tribunal de Familia por medio de un receptor judicial. El plazo para practicar la notificación es de veinte días hábiles siguientes a la subinscripción de la referida escritura o acta al margen de la inscripción del AUC. Cabe señalar que la falta de notificación no afectará el término del AUC, pero hará responsable al contratante negligente de los perjuicios que la ignorancia de dicho término pueda ocasionar al otro contratante. Sin embargo, el conviviente que practique la terminación por voluntad unilateral se eximirá de responsabilidad si el contratante a quien debe practicársele la notificación se encuentra desaparecido, se ignora su paradero o ha dejado de estar en comunicación con los suyos. En cualquier caso, no podrá alegarse la ignorancia del término del AUC transcurridos tres meses de efectuada la subinscripción antes señalada.

En cuanto a la terminación por declaración judicial de nulidad del acuerdo, ésta se producirá por sentencia ejecutoriada que deberá subinscribirse al margen de la inscripción del AUC, ya que de lo contrario no será oponible a terceros. El AUC podrá invalidarse por incapacidad de los contrayentes, por vicios del consentimiento, por impedimento de parentesco o por existir vínculo matrimonial no disuelto u otro AUC



vigente. La titularidad para ejercer la acción de nulidad corresponde a cualquiera de los convivientes civiles mientras vivan, salvo las excepciones que señala la ley,⁴ prescribiendo dicha acción dentro del plazo de un año. Sin perjuicio de lo anterior, producida la muerte de uno de los convivientes civiles después de notificada la demanda de nulidad, el tribunal podrá seguir conociendo de la acción de nulidad y dictar sentencia definitiva sobre el asunto.

Finalmente, los convivientes que pongan término al AUC por mutuo acuerdo, voluntad unilateral o declaración judicial de nulidad, podrán solicitar compensación económica.

III. Problemas prácticos

A continuación se comentan algunas de las dificultades que ha producido la aplicación de la Ley a poco tiempo de su entrada en vigencia.

1. Término del acuerdo de unión civil por voluntad unilateral de una de las partes

Como hemos señalado, la notificación del acta de cese unilateral de la convivencia debe llevarse a cabo mediante receptor particular. En este punto, la Ley altera la regla general de funcionamiento de los Tribunales de Familia, conforme a la cual las notificaciones las realiza la Central de Notificaciones del tribunal, que trabaja en forma gratuita y automática, bastando la sola resolución judicial, sin necesidad de encargo especial.

⁴ Si el acuerdo es celebrado por una persona menor de dieciocho años, la acción de nulidad sólo podrá ser intentada por ella o por sus ascendientes. En el caso de existir vicios del consentimiento (fuerza o error acerca de la identidad de la persona) la acción solo podrá ejercerse por el afectado. No se extinguirá la titularidad cuando el AUC haya sido celebrado en artículo de muerte o cuando la causal que funde la acción sea la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto o un AUC vigente, ya que, en el primer caso, la acción podrá ser interpuesta por los herederos del difunto y, en los demás, por el cónyuge o conviviente civil anterior o sus herederos.



En este aspecto, entonces, la Ley complejiza la realización del encargo pertinente a un receptor particular. Tomando en cuenta que la notificación no es un trámite esencial para poner término al AUC, parece excesiva la exigencia de este encargo. Ella podría redundar, en la práctica, en la omisión del trámite de notificación, con indeseadas consecuencias.

Por último, habrá de asumirse el costo monetario del pago de la gestión al receptor particular. En el evento que las partes gocen de privilegio de pobreza, el encargo debería hacerse al receptor de turno que designe la Corte de Apelaciones, generando una nueva dificultad al trámite.

2. Compensación económica

2.1. Como hemos visto, la Ley permite solicitar compensación económica en términos muy similares a los de la Ley de Matrimonio Civil. Al enumerar, en su artículo 27, las causales de término del AUC que permiten tal solicitud (mutuo acuerdo, voluntad unilateral y declaración de nulidad), excluye la muerte y la celebración del matrimonio entre los convivientes civiles.

Respecto de esta última forma de terminación, pueden plantearse dificultades respecto de una pareja de convivientes civiles que decide contraer matrimonio, el cual es disuelto con posterioridad. ¿Cuál es el tiempo a considerar al decidir sobre la compensación económica del cónyuge que alega ser el más débil? Podría echarse mano del artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, que señala que para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la *vida en común* de los cónyuges.

2.2. El plazo para demandar la compensación económica es de seis meses contados desde la fecha de subinscripción en el Registro Civil de la terminación del AUC. Al respecto, se presenta un problema relacionado con la notificación del acta de cese unilateral, el cual, como hemos visto, no es un trámite de la esencia para el término del AUC. Por su parte, recordemos que no podrá alegarse la ignorancia



del término del AUC transcurridos tres meses de efectuada la subinscripción antes señalada.

De esta forma, por efecto de esta presunción, el conviviente civil podría perder al menos la mitad del plazo que tiene para demandar compensación económica. La Ley se refiere a una potencial responsabilidad del conviviente civil que omite la notificación, aunque sin mencionar específicamente el problema de la compensación económica, cuya solicitud, estando sujeta a plazo, podría considerarse excluida de esta indemnización.

2.3. La Ley no se refiere a la forma en que puede acordarse la compensación económica cuando el AUC termina de común acuerdo. Considerando que la Ley, a diferencia de la Ley de Matrimonio Civil, no exige otorgar un acuerdo completo y suficiente, queda a la creatividad de las partes acordar la compensación en términos que sea aprobada por el tribunal. Al respecto, pueden plantearse algunas interrogantes: ¿Qué pasa si las partes acuerdan terminar su AUC y pactan la compensación, pero el tribunal luego rechaza los términos planteados en que ella fue definida? ¿Se mantiene el derecho a demandar compensación económica o se entiende precluido este derecho por haberse alcanzado un acuerdo al respecto? ¿Puede existir acuerdo sobre el hecho de poner término a la convivencia, pero no sobre la compensación? En este último caso, ¿cómo se hace valer el derecho a compensación económica?

2.4. La Ley hace aplicables al AUC, los artículos 62 a 66 de la Ley de Matrimonio Civil, entre los cuales se establece cómo se determina el monto y forma de pago de la compensación económica. La Ley no incorporó modificación alguna a la Ley N° 20.255, que establece reforma previsional, quedando así excluido uno de los mecanismos más frecuentes de pago de dicha compensación, cual es el traspaso del 50% de los fondos de AFP de una de las partes.

3. Prueba de estado civil

El artículo 1° de la Ley confiere a las partes el estado civil de conviviente civil. La norma, sin embargo, no modifica el artículo 305 del Código Civil, que se refiere al



estado civil y a la prueba del mismo (mediante las partidas de matrimonio, nacimiento, etc.). Al no modificarse el Código Civil en este punto, y omitiendo la Ley toda referencia respecto de la prueba del estado civil de conviviente civil, podría no quedar claro la forma en que éste debería probarse.

4. Presunción de paternidad

La Ley hace aplicable al AUC celebrado entre personas de distinto sexo la presunción de paternidad del marido del artículo 184 del Código Civil, replicándose así los plazos que existen en esta norma para el caso del matrimonio. Al respecto, recordemos que, por aplicación de las reglas del Código (artículo 128) y de la Ley (artículo 11), existe un lapso de treinta días en que podrían correr dos presunciones de paternidad. Esto, pues la mujer embarazada no puede contraer segundas nupcias durante los doscientos setenta días posteriores a la disolución de su primer matrimonio o AUC; en circunstancias que la presunción de paternidad del artículo 184 corre hasta trescientos días después de disuelto el matrimonio.

Entonces, existen treinta días durante los cuales la mujer embarazada puede contraer segundas nupcias, aunque estando vigente la presunción de paternidad del marido del primer matrimonio. El artículo 130 del Código Civil se refiere a la situación de confusión de paternidades derivada de las segundas nupcias de la madre embarazada; a diferencia del AUC, en que no existe reenvío a dicho artículo, por lo que podrían generarse dificultades.

5. Seguridad social

- 5.1. Los convivientes civiles no son causantes de asignación familiar y, como tales, no pueden ser carga de familia, salvo en los sistemas de salud de FONASA e ISAPRES, que están expresamente incluidos en la Ley. ¿Esto significaría que, en el caso de una empresa privada que tiene un servicio de bienestar que contempla beneficios para las cargas de familia del trabajador (u otras situaciones similares), el conviviente civil quedaría excluido de acceder a ellos? .



- 5.2. Los convivientes civiles quedan excluidos de los beneficios de salud de la Previsión de la Defensa Nacional -CAPREDENA- y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile -DIPRECA-; por lo que no quedan protegidos en condiciones de igualdad con los cónyuges.
- 5.3. Los convivientes civiles quedan excluidos de beneficios de pensiones de supervivencia que provengan del seguro de social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del Instituto Previsional de Salud -IPS-, de CAPREDENA y de DIPRECA.